

INFORME ANUAL SOBRE TRATA DE PERSONAS 2016

GUATEMALA – Nivel 2

Guatemala es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Las mujeres, niñas y niños guatemaltecos son utilizados en la trata con fines de explotación sexual dentro del país, así como en México, Estados Unidos, Belice y otros países. Los turistas sexuales, predominantemente de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, y hombres guatemaltecos participan en la trata con fines de explotación sexual de menores. Mujeres y niños de otros países latinoamericanos y de Estados Unidos son utilizados en la trata con fines de explotación sexual en Guatemala. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos son víctimas de trabajo forzoso dentro del país, con frecuencia en la agricultura y el servicio doméstico, así como también en la industria de la confección, pequeños negocios y sectores similares en México, Estados Unidos y otros países. La servidumbre doméstica en Guatemala a veces se produce a través de los matrimonios forzados. La población indígena guatemalteca es especialmente vulnerable a la trata de personas. Se explota a los niños guatemaltecos forzándoles a mendigar y vender en las calles, en particular en la Ciudad de Guatemala y a lo largo de la zona fronteriza con México. A menudo, son los miembros de la familia de las víctimas del niño quienes facilitan su explotación. Las organizaciones criminales, incluyendo las pandillas, explotan a las niñas en el tráfico sexual y coaccionan a los hombres jóvenes en las zonas urbanas para vender o transportar drogas o cometer extorsiones. Algunos migrantes latinoamericanos que transitan por Guatemala en ruta hacia México y Estados Unidos son sometidos a la trata sexual o trabajo forzoso en México, Estados Unidos, o en Guatemala.

El gobierno de Guatemala no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está realizando esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno aumentó las investigaciones relacionadas con la trata, los enjuiciamientos y condenas, y obtuvo una condena por tráfico de trabajo forzoso, en comparación con cuatro en el 2014. La Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas (SVET) sostuvo la coordinación gubernamental en iniciativas contra la trata, incluyendo el apoyo a las redes a nivel departamental y planes de acción concretos para hacer frente a la prevención y financiamiento de emergencia para los refugios, a pesar de los recortes de fondos de todo el gobierno, pero el gobierno no asignó un presupuesto específico para proteger o proporcionar servicios especializados para las víctimas

de trata. Si bien el gobierno aumentó ligeramente el financiamiento general de servicios a las víctimas infantiles de trata sexual y la asistencia a un mayor número total de víctimas de la trata en comparación con el 2014, los funcionarios han reducido los fondos para tres refugios y víctimas identificadas no tuvieron acceso a servicios especializados. Los refugios para adultos limitaron la libertad de movimiento de las víctimas, y se mantuvo limitado los servicios especializados para las víctimas de sexo masculino y las víctimas del trabajo forzoso. Las autoridades progresaron en un importante caso de trata de personas que implica al hijo de un ex magistrado, que ha permanecido en la fase previa al juicio durante varios años; un tribunal de apelaciones revocó la absolución de un ex concejal cómplice en trata mediante la compra de actos sexuales de un menor; y el gobierno aceleró el caso de los dos jueces que fueron acusados de absolver injustamente a un influyente funcionario acusado de trata sexual. El gobierno, sin embargo, no condenó penalmente a los funcionarios por complicidad en la trata.

RECOMENDACIONES PARA GUATEMALA:

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios especializados para todas las víctimas, incluso para las víctimas del sexo masculino; aumentar los esfuerzos para que los funcionarios del gobierno sean penalmente responsables por complicidad en la trata; fortalecer la implementación del protocolo contra la trata de 2014-2015; modificar la legislación para permitir que los adultos tengan acceso a los refugios y mejorar los servicios integrales y de protección de testigos; continuar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la trata, en especial los presuntos casos de trabajo forzoso y la servidumbre doméstica; aumentar la capacitación de los jueces, quienes según la legislación de Guatemala son los únicos responsables de remitir a las víctimas para recibir apoyo y asegurar que todas las víctimas sean referidos a los centros de atención apropiados; como parte del desarrollo de un grupo de fiscales y jueces especializados fuera de la capital, aumentar el entrenamiento de la policía y funcionarios de justicia penal a fin de que los casos de trabajo forzoso y de trata sexual sean investigados y procesados como trata y no como una adopción irregular; proporcionar apoyo a las víctimas para reintegración y la protección de testigos; asignar y desembolsar fondos para servicios especializados a las víctimas, incluidos los administrados por organizaciones no gubernamentales; mantener los esfuerzos para identificar a las víctimas de trata, particularmente entre las poblaciones vulnerables, tales como los niños trabajadores, los migrantes retornados, personas dedicadas al comercio sexual, y los niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con las pandillas; aumentar los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los turistas sexuales;

y orientar las actividades de prevención hacia las poblaciones más vulnerables, incluidas las comunidades indígenas.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno fortaleció los esfuerzos para procesar y condenar a los delincuentes de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y, por primera vez, investigó y enjuició a varios funcionarios públicos implicados en la trata. La ley contra la trata de personas de 2009 prohíbe toda forma de trata de personas y prescribe sanciones de 8 a 18 años de encarcelamiento, las cuales son suficientemente estrictas y proporcionales a las sanciones prescritas para otros delitos graves, como la violación. El gobierno inició las investigaciones de 280 denuncias de delitos relacionados con la trata en 2015, en comparación con 266 investigaciones en 2014, y enjuició a 105 demandados en 28 casos separados relacionados con la trata, en comparación con 62 en 2014; la mayoría de los casos tenían que ver con trata sexual, mientras que las autoridades identificaron un número limitado de casos de trabajo forzoso. Estos totales pueden incluir también los crímenes que no cumplen con la definición internacional de la trata, como la adopción ilegal. Las autoridades condenaron a 39 traficantes en 28 casos separados en 2015, en comparación con 20 traficantes condenados en 2014, incluyendo 12 casos de tráfico sexual y un caso de tráfico de trabajo forzoso, con penas de entre ocho a 48 años de prisión. El gobierno obtuvo su primera condena por tráfico internacional de trabajo forzoso, con la participación de guatemaltecos explotados en el trabajo forzoso en Jordania.

La capacidad de los oficiales de la policía anti-trata y de los fiscales para realizar investigaciones fuera de la capital, ha mejorado, aunque sigue siendo limitada por la financiación y la formación inadecuada. Los tribunales especializados continúan conociendo los casos de trata y violencia de género, incluyendo un Juzgado especializado de 24 horas en la Ciudad Guatemala. Algunos miembros del poder judicial, especialmente en el interior, carecían de una formación adecuada para aplicar las pruebas forenses en los juicios y, a veces, aplican sentencias de trata de forma desigual. Los funcionarios investigaron y procesaron pocos casos de trabajo forzoso o casos que no implican elementos del crimen organizado; sin embargo, las autoridades investigaron un caso en el que durante una rutina de inspección de trabajo se descubrió a niños sometidos a trabajo forzoso en tiendas de conveniencia. Los funcionarios no identificaron casos de actividad criminal forzada. Las autoridades guatemaltecas entrenaron a 127 fiscales y asistentes, 121 funcionarios de seguridad del aeropuerto, y 85 policías turísticos sobre indicadores de trata y la identificación de las víctimas de

trata, entre otros temas. Las autoridades guatemaltecas también llevaron a cabo sesiones de capacitación para los inspectores de trabajo, cuerpo diplomático, y 17 empresas para mejorar los esfuerzos de identificación y enjuiciamiento. Los funcionarios coordinaron una operación policial con El Salvador y México, que dio como resultado la detención de 36 presuntos miembros de una red de tráfico y el rescate de 39 víctimas.

El gobierno aumentó las acciones para hacer frente a la complicidad oficial en los delitos de trata, pero no condenaron a ningún funcionario cómplice. El gobierno despojó de la inmunidad oficial a dos jueces acusados de absolver injustamente a un funcionario del Gobierno por tráfico sexual. Dos funcionarios fueron detenidos por compartir información sensible con los grupos delictivos organizados, incluidos los que presuntamente están vinculados con la trata de personas.

PROTECCION

El gobierno aumentó los esfuerzos para identificar y proteger a las víctimas. El gobierno identificó a 673 víctimas de la trata en 2015, un aumento significativo de las 287 víctimas reportadas en 2014; sin embargo, los datos informados no especificaron los tipos de trata experimentados. De las 673 víctimas identificadas, al menos 456 eran mujeres y niñas, en comparación con un total de 106 en 2014; y 217 víctimas de la trata eran hombres y niños, incluyendo al menos a 174 hombres por trabajo forzoso, un aumento de 26 en 2014. Las autoridades de la Inspección de Trabajo implementaron un protocolo para identificar posibles víctimas de trata de explotación sexual y de trabajo forzoso durante las inspecciones de trabajo, y el gobierno aumentó la capacitación del personal y policías en las clínicas de la violencia sexual en los hospitales públicos para facilitar la identificación de las víctimas de trata. Los funcionarios, sin embargo, tuvieron dificultades para reconocer la servidumbre doméstica y otros tipos de trabajo forzoso que no impliquen redes delictivas como la trata de personas; las víctimas de estas formas de trata es poco probable que fueran identificadas o referidas a los servicios de protección. Las autoridades colaboraron para identificar y rescatar al menos a 135 niños en el trabajo infantil forzoso en la capital.

La calidad y disponibilidad de servicios especializados para las víctimas siguen siendo insuficientes, y el gobierno no refirió a la mayoría de las víctimas a recibir asistencia. Los funcionarios finalizaron un protocolo de protección de las víctimas en 2015 para guiar a las agencias de gobierno que ofrecen asistencia a las víctimas, pero no se puso en práctica durante el período del informe. La

legislación guatemalteca establece que los jueces refieren a los refugios públicos o privados; en 2015, 249 jueces refirieron a las víctimas a refugios, un aumento de 132 referencias en 2014, pero un poco menos de la mitad de todas las víctimas identificadas. La mayoría de los referidos a refugios fueron niños; sólo siete hombres adultos recibieron servicios residenciales. Los jueces a veces refieren a los niños víctimas con sus familias, dejándolos un poco vulnerables a volver a la trata, ya que algunos miembros de la familia a menudo se involucran en su explotación. Las víctimas repatriadas podrían ser referidas a los servicios, pero las autoridades no investigan para ver indicadores de trata entre el gran número de guatemaltecos devueltos desde el extranjero, incluidos los niños migrantes no acompañados.

El gobierno continuó financiando tres refugios gubernamentales, así como las organizaciones no gubernamentales que proporcionan servicios especializados, sobre todo para los niños víctimas de trata. Los tres refugios administrados por el gobierno asistieron a 153 víctimas de la trata. Una ONG apoyada por el gobierno proporcionó servicios especializados a 55 niños adicionales; sin embargo, esta ONG ha reducido sus servicios disponibles, en parte debido a los recortes de fondos del gobierno. El único refugio administrado por el gobierno para las mujeres se cerró en diciembre de 2015, después de proporcionar servicios a 20 mujeres en 2015; mientras estuvo en funcionamiento, el personal restringía que los residentes pudiesen salir del refugio, negando con eficacia su capacidad de obtener ingresos o participar en otras actividades al aire libre, mientras que en el refugio. La calidad de los servicios en los refugios restantes administrados por el gobierno siguió siendo deficiente; los refugios de las ONG proporcionaron atención de mejor calidad y tienen la capacidad de refugiar a las víctimas mientras sea necesario para hacer frente a las necesidades psicosociales, de reintegración, y las de seguridad. No obstante, los operadores de los refugios de la ONG expresaron preocupación por la seguridad de las víctimas al ser dados de alta de los refugios. Citaron la insuficiencia de servicios continuos de administración de casos y reintegración en los refugios del gobierno, dejando vulnerables a algunas de las víctimas a volver a la trata o las represalias de los traficantes, particularmente aquellos cuyos casos se trataba de grupos del crimen organizado o funcionarios públicos. Las ONG proporcionan los únicos servicios para llenar este vacío, a veces albergando a las víctimas por un largo plazo. El gobierno tuvo en funcionamiento 15 centros en el interior del país, que proporcionan asistencia para la reintegración no residencial a los niños víctimas de trata y sus familias, pero no los servicios especializados. Existen pocos servicios disponibles en el país para las víctimas de sexo masculino; la mayoría de los niños y algunas niñas se colocaron en un refugio gubernamental que albergaba a los niños víctimas de abuso o

negligencia, así como a menores. Aunque el gobierno no tiene refugios especializados para víctimas del sexo masculino, se proporciona refugio residencial temporal a siete hombres adultos víctimas de la trata.

Las autoridades alentaron a las víctimas para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los traficantes y les facilitaron las opciones para el testimonio privado; un número no especificado lo hizo con apoyo legal y psicológico de las ONG y el Ministerio Público. Las víctimas que residen en las instalaciones del gobierno no recibieron un apoyo jurídico adecuado o de protección de testigos. Los fiscales citaron la falta de opciones de protección adecuados para las víctimas adultas como un impedimento significativo para llevar a cabo procesos judiciales en los casos de adultos. Los jueces pueden ordenar la restitución al condenar a los traficantes y las víctimas tenían derecho a presentar demandas civiles por daños y perjuicios y daños sufridos como consecuencia de ser sometidos a la trata; en la práctica, no hay demandas civiles respecto a los daños por los delitos de trata que se presentaron en 2015, en comparación con las 10 víctimas que obtuvieron la restitución por condenas penales en 2014. No hubo informes de que el gobierno haya detenido, multado, o de otra manera penalizado a víctimas identificadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de estar sometidas a la trata de personas. El gobierno, sin embargo, no reconoció a los niños obligados a participar en actividades delictivas como víctimas de trata; los funcionarios reconocieron que algunas de estas víctimas pueden haber sido procesados o tratados como criminales. La ley de Guatemala proporcionó alternativas legales para el traslado de las víctimas extranjeras que pueden enfrentar dificultades o castigos al regresar a sus países de origen, pero todas las víctimas extranjeras conocidas optaron por la repatriación. Las víctimas extranjeras tuvieron el mismo acceso a la atención como las víctimas internas de trata.

PREVENCION

El gobierno continuó con los esfuerzos de prevención. La SVET continuó supervisando la comisión interinstitucional contra la trata de personas y coordinando los esfuerzos del gobierno contra la trata y la violencia basada en el género. Los funcionarios supervisaron 23 redes departamentales en el interior del país, que respondieron los casos de trata y llevaron a cabo actividades de prevención; sin embargo, este tipo de actividades de la red se desaceleró debido a limitaciones del presupuesto del 2015. Se implementó el nuevo protocolo de inspección general del trabajo, el cual incluyó módulos en la identificación de las víctimas de la trata y la explotación de menores en trabajo forzoso. El gobierno llevó a cabo una amplia gama de iniciativas para educar a las potenciales víctimas,

el público, los funcionarios de gobierno, y los turistas acerca de los peligros, las causas y consecuencias de la trata. Las autoridades llevaron a cabo campañas de prevención sobre la sensibilización de la trata y el turismo sexual dirigido a estudiantes, visitantes a los hospitales, activistas, funcionarios de seguridad del aeropuerto, la policía de turismo y comercio. En el marco del Código de Conducta para la Prevención del Turismo Sexual Infantil, SVET capacitó a 17 empresas en todo el país, llegando a un total de 2,405 individuos. El gobierno realizó esfuerzos para reducir la demanda de sexo comercial, investigando a los sospechosos que han comprado el comercio sexual con niños. El gobierno no hizo ningún esfuerzo discernible para reducir la demanda de trabajo forzoso. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata a sus diplomáticos y tropas guatemaltecas antes de su despliegue en el extranjero en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.